

# Entrevista

**CARLOS LÓPEZ. SECRETARIO GENERAL DE FETE-UGT**

## “El fracaso no es solo culpa del sistema educativo, sino también del modelo productivo”

### PERFIL

En los últimos meses, el día a día de Carlos López (A Rua, Orense, 1955) es la Lomce. El líder de FETE-UGT dedica sus esfuerzos a luchar contra una ley que ha conseguido poner de acuerdo a toda la comunidad educativa: a nadie le gusta. Pero no solo de confrontación vive el sindicalista. El convenio en la educación concertada, la situación de la universidad pública, “poner en valor al afiliado” y reducir estructuras son los retos —a nivel interno y externo— que se marca este maestro a medio y largo plazo. Cuando no dedica sus esfuerzos a defender la educación pública, este gallego reconvertido en aragonés, donde es maestro desde hace 33 años, se escapa a los Pirineos a hacer travesías o la coral en la que alimenta su otra gran pasión, la música clásica. López, que coordina el sindicato con mayor representación en el sistema educativo con 5.161 delegados y 62.000 afiliados, fue reelegido el pasado fin de semana como secretario general de FETE-UGT para los próximos cuatro años.



**“Queremos fomentar la participación de la afiliación, que opine sobre huelgas, convenios, etc.”**

DANIEL SÁNCHEZ

¿Qué tal ha ido el Congreso?

Estoy muy contento. Hemos tenido un debate muy intenso y he visto una Federación viva y con ganas de defender sus postulados. Como miembro de dirección estuvimos atentos y con poca participación para escuchar lo que decía la gente y ejecutar las propuestas de la federación.

Hágame un balance de los últimos cuatro años.

Hubo dos partes diferenciadas. Una primera con el debate de la LOE, en la que estuvimos muy cerca de conseguir un pacto educativo. Yo entiendo el pacto como buscar unos elementos de confluencia y consenso entre las dos redes educativas y las comunidades educativas; y, para eso, había que rebajar planteamientos. Creo que la LOE iba dirigida en ese sentido con aspectos como remarcar el perfil orientativo de 4º de la ESO o rebajar la entrada de los alumnos a los PCPI a los 15 años, o incluso el tratamiento de la FP para flexibilizarlo y que no fuese una carrera de obstáculos para los alumnos. La Lomce es una ley partidista y por eso estamos en confrontación. Desde el punto de vista sindical hemos pasado de aportar nuestros documentos para el debate a

un momento de confrontación, porque la Lomce es la ley del PP, no de los españoles.

Huelgas, movilizaciones, protestas... ¿Encuentra algún aspecto positivo en la Lomce?

[Piensa] Me hace dudar. [Vuelve a pensar] La educación en valores es una aberración con la religión, la modificación que hace de los itinerarios es nefasta. Ya en la LOE se apuntaba el perfil orientativo del 4º de la ESO hacia la FP y el Bachillerato. Pero manteniendo la estructura de la ESO, es decir, estar todos para optar al final. Hablamos de unas edades en las que se puede dar un bajón, pero luego recuperar. Marcar los itinerarios tan fuertes como el 4º de la ESO donde prácticamente ya vas a un sitio u otro, es nefasto. En FP algunos aspectos no nos disgustan, como las pasarelas de un grado a otro, la transformación que se hace de la FP Básica, que al principio no había conexión con el Grado Medio y ahora parece que lo quieren hacer. Las reválidas... esto es una carrera de obstáculos que al que tiene dificultades en el aprendizaje le quitan los apoyos, le quitan los programas de ayuda, y ahora, encima, le ponen una serie de dificultades para que no llegue a la universidad. Hacer la selectividad y que después algunas universidades pueden hacer sus propias pruebas va en contra de la igualdad de oportunidades.

¿Cree que es posible cambiar algo de la ley?

Está confluyendo no solo el movimiento social contra la ley, sino que organismos como el Consejo de Estado recogen varias de nuestras reivindicaciones: le recuerda al Gobierno que es una ley que nace de la confrontación y le anima a buscar consenso. Le dice que la educación en valores tenía que ser obligatoria para todos los alumnos. Le plantea que las fórmulas para llegar a la universidad puede poner en peligro la igualdad de oportunidades, que el tema de la lengua es competencia de las comunidades autónomas, generando conflictos innecesarios como en Cataluña. Yo creo que ha sido una provocación social darle valor académico a la religión. Se están configurando una serie de elementos donde la soledad del PP pueda llevarle o bien a modificar la ley o a ser una ley que evidentemente tiene fecha de caducidad. Nosotros exigimos que si sale esta ley, cuando la composición del Parlamento lo permita, se retire y se consensue una nueva.

Usted ha tratado con el ministro, ha negociado con él. ¿Tiene la misma actitud en privado que en público?

El ministro es una persona locuaz, yo creo que provocadora hacia la comunidad educativa y su forma de actuar así lo manifiesta. Pero creo que ha ido aprendiendo con el cargo, ya no sale tanto en los medios como

antes. Está siendo más prudente. Lo que tendría que decir del ministro es que no hay un diálogo social. Nos hemos reunido con él, hemos hecho nuestros planteamientos... Nosotros creemos que una ley debe ser garante de la igualdad de oportunidades, tiene que estar apoyando a aquellos con dificultades en el proceso de aprendizaje, y la Lomce es segregadora, elitista y con una fuerte carga ideológica. No hay ningún elemento para que UGT apoye esta ley. Sin embargo, sí le planteamos que había algunos espacios donde cabría el debate.

¿Por ejemplo?

Coincidimos con los que piensan que la postobligatoria es uno de los temas a plantearse para acabar con una de las lastras del sistema educativo. Pero matizamos: nosotros somos partidarios de un Bachillerato de tres años. El actual no tiene una identidad propia. Primero de Bachillerato es prácticamente para adecuar al alumno de la ESO y el segundo estás preparando la selectividad. Nosotros apostamos por uno de tres años. La diferencia con el ministro es que salvamos la educación obligatoria hasta los 16, lo haríamos posterior. El ministro quería transformar 4º de la ESO.

La FP necesita una reflexión, hay que hacerla más flexible. Podemos reducir el abandono escolar, primando con becas a los alumnos, favoreciendo la relación con las empresas

para favorecer la inserción laboral y permitiendo a las empresas involucrarse en la formación. Es decir, buscando elementos de la FP Dual, pero adaptándolos a nuestro sistema reglado de FP, que es muy bueno. Como muestra, los ciclos de Grado Superior son la etapa educativa que mejor está insertando aun en plena crisis a nivel laboral. Y tenemos los grados medios y un 26% de abandono escolar. Pero no es culpable el sistema educativo solo, sino el propio modelo de producción. Si no, ¿cómo se entiende que en dos años hayamos bajado casi seis puntos en abandono escolar? No es por el sistema educativo. Es porque el alumno se iba a un trabajo precario, ahora no existe ese trabajo precario y se vuelve a los centros educativos para buscar una nueva cualificación profesional. Yo creo que ahí, en la etapa de la postobligatoria, entraríamos en un debate y en el Bachillerato también. Estamos esperando. Es lo que caracteriza esta etapa: hemos tenido reuniones, hemos hablado, pero no hemos visto en el documento las aportaciones de UGT.

Cuando vuelva a haber trabajo e, seguramente, siga siendo precario, ¿aumentará el fracaso escolar otra vez entonces?

Si el trabajo vuelve a ser precario, seguramente se volvería a producir la misma situación, sí. Ahí tenemos un reto que queremos plantear al Ministerio. ¿Qué medidas vamos a tomar

para que no se vuelva a producir? Hay dos opciones: becar a esos alumnos para que continúen en el sistema educativo o revisar el mapa de titulaciones para ver aquellas que tienen más inserción laboral, y comprometer a las empresas en ese proceso formativo.

Este segundo punto parece más factible hoy en día que el de las becas...

En Europa nos mandan recorres en educación, pero los países que hacen eso nos dicen todo lo contrario. Nosotros en 2015 llegaremos a un presupuesto para Educación del 3,9% del PIB. En Francia está en el 5,9%, en Alemania el 5,1%, en Finlandia el 6,8%. La media de la UE es de 5,4%. El eslogan de nuestro congreso ha sido: "La educación, garantía para la igualdad de oportunidades". Eso cuesta dinero. La inversión en educación a lo mejor no tiene una rentabilidad de hoy para mañana, pero sí a futuro. Dos ejemplos. Hace poco la fundación universitaria Ortega y Gasset sacó unos datos reveladores: a la conclusión de una etapa, de un sistema, que buscaba la cohesión social y la equidad, el 50% de los inmigrantes de segunda generación se siente español. Y estamos viendo cómo reacciona la inmigración en otros países: recientemente en Suecia, o el área metropolitana de París son ejemplos. El sistema español tenía una política de ayudas a la integración de los inmigrantes que venían a buscar trabajo. Había profesores de apoyo, aulas de enlace, atención a la diversidad... que suponga que el 50% se considere español es una inversión de cohesión social. Claro, esto no es algo contable, medible. El Gobierno del PP habrá bajado la inversión en 10.000 millones para 2015. Ahí ni caben becas ni atención a la diversidad. Lo que cabe es que el que quiera una educación de calidad, se la pague. Y el resto, el que más ayuda necesita, queda desprotegido.

¿Cómo resumiría las líneas de acción de los próximos cuatro años?

Llevo ocho años, creo que los mandatos no hay que eternizarlos y creo que en 12 años se puede desarrollar, estabilizar un proyecto y dejar paso a otro. Los responsables de las estructuras sindicales tienen fecha de caducidad. Yo he presentado un proyecto que se define por ser una federación territorializada. En estos momentos, la educación está transferida, el peso de la acción sindical debe recaer en las CCAA a la hora de tomar sus decisiones. Pero necesitamos tener un discurso coherente en todo el Estado. Esa es la labor de la comisión ejecutiva federal. También pretendo reducir al mínimo la comisión ejecutiva. Una de las cosas que creo que fue un déficit en este último período ha sido la participación de la afiliación. No fuimos capaces de que la afiliación tomase parte activa en las decisiones de su dirección. Hemos hecho una política basada en los responsables sindicales. El reto que tenemos es que, a través de encuestas o referendos, utilizando las nuevas tecnologías, el afiliado pueda transmitir su opinión a la federación.

¿Qué otros retos tiene este mandato?

Hay tres líneas de trabajo. Una, la política sindical, esto es, seguir esas acciones contra la Lomce. Y después

hay abiertos, desde el punto de vista de la acción sindical como organización, tres temas que nos interesan: el estatuto de la función docente, la situación de la universidad y el convenio para los trabajadores de la concertada, que lleva años bloqueado.

Vamos por partes. El estatuto. ¿Dónde han marcado las líneas rojas?

Tiene que tener tres aspectos fundamentales, sin los que no tendrá nuestro apoyo. En primer lugar debe haber un sistema de ingreso donde quepan tres aspectos para buscar a los mejores profesionales de la educación. Que la nota media del ingreso fuese de tres partes: de la oposición, del concurso y de unas prácticas que también fuera evaluadas. Habría que buscar el peso de cada una de ellas. Creemos que una parte importante es la memoria a la hora de exponer un tema, pero a lo mejor ese profesor que es muy bueno exponiendo el tema, no lo es tanto transmitiendo esos conocimientos. Por lo tanto la parte de práctica, que por lo menos ser de un año y estar tutorizada, debe ser una parte considerable.

Otra, la carrera profesional. Es clave para la motivación del profesorado. En estos momentos hay muy poca diferencia salarial entre el profesor que entra y el que se retira. Tiene que haber unos incentivos para que el que cumple y se motiva pueda verlo reflejado en su nómina. Estamos de acuerdo en que sea por sistema de grados (cada seis años se podrían mejorar las retribuciones). Y, para llegar a eso, planteamos que tiene que haber dos posibilidades: el que quiera una evaluación de una persona externa al centro o la acreditación de trabajos a realizar en ese período de seis años. Trabajos vinculados al proyecto educativo de ese centro. Pensamos que los dos sistemas deben convivir, y el profesor elegirá uno u otro. Por último, mantenemos que la jubilación a los 60 es buena para el sistema. La exigencia de unas clases en estos momentos produce un cansancio en la vida profesional. Y si se quitase ese 10% de tasa de reposición decretada por el Gobierno, que ha supuesto no contratar a unos 80.000 trabajadores interinos en España, podría llevar a una renovación de las plantillas.

En 2010, en plena crisis, ya decía que quería homologar los salarios a nivel europeo. ¿Mantiene ese discurso en las actuales circunstancias?

Desde 2010 los maestros de Primaria hemos perdido un 27% del poder adquisitivo. En Secundaria el 34,12% y los catedráticos, el 33%. Ya sé que se lanza de forma interesada que los docentes españoles cobramos mucho respecto a Europa. Yo matizo: cobramos quizá un poco por encima al inicio de la carrera profesional y al inicio se nos van mucho. Por eso hay que crear esos incentivos. Si vamos a tener un estatuto, primero vamos a reconocer que el profesorado ha perdido un 30% de poder adquisitivo en tres años.

¿Hay voluntad del Ministerio para sacar adelante al estatuto?

Llevamos hablando de él desde los 80. A veces se ha dejado por miedo al compromiso, por nuestra parte a veces y otras del Ministerio. Ahora se necesita. Si el diálogo social



### “La Lomce es confrontación, pero hay otros espacios para el debate”

es como hasta ahora, tendremos reuniones y harán lo que quieran. Si no incorpora las líneas que hemos planteado, no lo vamos a apoyar. El Ministerio puede sacar adelante un estatuto que le parezca oportuno, al margen de la comunidad, y tendrá confrontación.

El segundo aspecto era la Universidad. ¿Cuál es su mayor preocupación?

El informe de evaluación que salió. No estamos de acuerdo con que las universidades españolas, como parece deducirse de ese informe y parece transmitir la Administración, son malas porque no salen en no sé qué ranking. Si fuesen malas, no estarían buscando titulados españoles sanitarios e ingenieros los países del norte de Europa. Buscar un sistema anglosajón, que es lo que pretende el informe, a la hora de gestionar las universidades españolas, no nos gusta: externalización de la gestión, contratación de profesorado por un sistema al margen de la universidad, elección del rector al margen de la comunidad universitaria, etc. Algunas cuestiones del informe desde el punto de vista de la gestión podrían estudiarse, pero si pretenden abrir un campo para la privatización, no estaremos de acuerdo.

El último reto, el convenio de la educación concertada.

Llevamos más de cuatro años negociando un convenio. Los trabajadores están hartos. Yo le pediría a la patronal que ya hemos firmado un convenio en Cataluña (por lo menos UGT) que debe ser extendido a nivel estatal. Si antes de finalizar el curso no hay solución por parte de la patronal, nos veremos abocados a la movilización del sector porque estamos hartos.

Ha declarado que se plantean objetar a la Lomce si finalmente es aprobada en el Parlamento. ¿Cómo lo harán?

Vamos a buscar cómo, si el trámite parlamentario consigue sacar adelante una ley tan injusta, darle la herramienta al profesorado para objetar, si se puede, jurídicamente. No digo toda la ley, sino aquellos aspectos que van en perjuicio de la Constitución. La educación en valores es uno de los temas.

¿Son malos tiempos para ser sindicalista?

Yo soy consciente de la presión, y lo noto desde el punto de vista familiar y de los amigos. En una organización de 1.165.000 afiliados como UGT hay un porcentaje por el que yo no pondría la mano en el fuego. En una organización tan grande hay de todo, por eso los principios democráticos de los estatutos son tan importantes. Se dice que somos

unos vagos, etc. En realidad es complicado de llevar adelante. Hay que poner en valor el sindicalismo. La base de la Constitución dice que para articular y vertebrar la sociedad se formaban los partidos y sindicatos. Y que los sindicatos iban a recibir una subvención —que por cierto se ha mermado notablemente— en base a que la negociación colectiva tuviese efecto para todos los trabajadores. Hay unos profesores que se afilian a los sindicatos. Y con su cuota podemos contratar abogados para que los defiendan, y tenemos unos gastos de negociación colectiva, desde asesores hasta las personas que se tienen que desplazar para negociar. Yo dije desde el principio que eso hay que modificarlo. Yo no quiero subvenciones. Pero aquel que quiera beneficiarse del trabajo sindical, que pague un canon, como pasa en Europa. En algunos países, como los nórdicos, hay una afiliación masiva a las centrales. ¿Por qué? Pues porque si uno quiere esa independencia, paga ese canon. Normalmente si uno firma el convenio, en teoría tendrían que beneficiarse solo los afiliados a la FETE-UGT si firma ese convenio. Si no estás afiliado y quieres que se te aplique, tienes que pagar la cuota al sindicato que ha firmado. Es lo que llamamos negociación de efecto limitado. Creo que así se pondría en valor el trabajo sindical.